

**Violencia Juvenil y Delincuencia
en la región de Latinoamérica**

Patrizia Benvenuti

Tesina para la
London School of Economics, 2003

Traducido por
Aída Ramos Martínez

Índice

Introducción	1
Capítulo I: Delincuencia y Desigualdad	6
1.1 Análisis de la literatura	6
Capítulo II: Delincuencia juvenil en la región	13
2.1 Tendencias delictivas en la región	13
2.2 Violencia socioeconómica: El fenómeno de las pandillas juveniles	18
2.3 El aumento de las maras: el caso de El Salvador	21
Capítulo III: Los factores de la delincuencia juvenil	25
3.1 Las dimensiones de pobreza y desigualdad	25
3.2 Acceso desigual a la educación	28
3.3 Jóvenes y Desempleo	29
3.4 Otros factores correlativos	30
Capítulo IV: Políticas y Recomendaciones	35
Conclusión	42
Bibliografía	43

Listado de Tablas, Gráficos y Cuadros:

Cuadro 2.1: Definiciones de Violencia.....	16
Cuadro 2.2: Categorías de Violencia	16
Tabla 2.1: Tasas de Homicidio en Latinoamérica	17
Tabla 2.2: Tasas de Homicidio entre los 10-29 años por país	17
Tabla 2.3: Número de pandillas juveniles en Centroamérica	21
Tabla 3.1: El modelo epidemiológico de la violencia.....	34
Tabla 4.1: Estrategias de prevención de la violencia.....	41
Gráfica 2.1: Razones para unirse a la pandilla.....	24
Gráfica 2.2: Lo que esperan del futuro los miembros de la pandilla	24
Cuadro 4.1: Las Comunas, Ciudad de México	41
Cuadro 4.2: Homies Unidos, San Salvador, El Salvador.....	41

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a una serie de personas por su apoyo durante el último año.

Primero, quisiera dar las gracias a Peter Townsend por su continuo apoyo y sus ánimos durante este año, y por sus conocimientos, integridad y humanidad, que han sido de gran inspiración para mí. Sin él, nunca habría llegado a entender el impacto de la pobreza en la vida de las personas, y las formas en que ciertas jerarquías de poder contribuyen a perpetuarla.

También me gustaría dar las gracias a Francesca Tarocco por su presencia, siempre apoyándome, a Fuchsia Dunlop por su magnífico trabajo de revisión, y a Paolo Bruni por su grato y discreto apoyo.

También le estoy muy agradecido a Dennis Rodgers por toda la información que me proporcionó y por el excelente trabajo realizado sobre las pandillas en Centroamérica.

Mi gratitud especial también va a Frédéric Asseline por su apoyo inestimable, si bien a distancia, a lo largo de este año.

Este trabajo está dedicado a todos los chicos en la cárcel de Wormwood Scrubs, y en especial a John, Robin, Jessie y Gonzalo.

Septiembre de 2003, Londres

Introducción

En todo el mundo, la violencia se está convirtiendo en un desafío urgente y un asunto de gran importancia a nivel económico, social, sanitario y gubernamental (Moser 1999). La delincuencia y la violencia afectan adversamente al desarrollo económico y social, refuerzan la exclusión social y la pobreza, minan la ciudadanía y la seguridad y reducen la capacidad del Estado de gobernar eficientemente.

Pese a que el fenómeno de la violencia no es nuevo, hoy día Latinoamérica, con una media de 28,4 homicidios por cada 100.000¹ habitantes, registra una de las tasas más altas de homicidios y victimización criminal del mundo (UNICRI, 1995). Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de homicidios en la región creció más de un 44 por ciento durante el periodo 1984-1994 (OPS, 1996, citado en Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). De todos los homicidios denunciados, un 28,7 por ciento se atribuyeron a varones jóvenes de entre 10 y 19 años de edad (Guerrero, 1997, citado en Arriagada y Godoy, 1999).

Mientras que las condiciones socioeconómicas varían tanto entre los países como dentro de ellos, existen una serie de factores internos y externos que pueden ser comúnmente asociados con los altos niveles de violencia y delincuencia en los que están involucrados muchos jóvenes de la región.

El increíblemente rápido proceso de urbanización experimentado en varios países (especialmente El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y México), junto con la pobreza persistente, la desigualdad, la violencia política, la insuficiencia de los servicios sociales,

¹ La “tasa de homicidios” – i.e., el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes – es la medida más usada para juzgar el nivel de violencia de una sociedad en particular. Basándonos en estudios sanitarios en lugar de jurídicos,

la consolidación de organizaciones criminales internacionales, la expansión del uso y tráfico de drogas (especialmente la llegada al mercado de la droga de la cocaína crack), la desintegración de las familias y el entramado social y la disponibilidad de armas se consideran y citan como las principales causas del recrudecimiento de la violencia en la región (Moser, 1999, 2002; Ayres, 1998).

Las crisis económicas experimentadas por varios países de la región, principalmente causadas por la implantación de imprudentes políticas macro-económicas y de ajuste, han debilitado seriamente la capacidad del Estado de invertir en servicios básicos esenciales, especialmente la educación y la salud. A pesar de que las tasas de inscripción en escuelas primarias se han incrementado consistentemente durante los últimos años, las tasas de repetición de curso y fracaso escolar se mantienen altas, planteando preocupaciones sobre la calidad general de la educación primaria (Moser, 1999). Las tasas de inscripción en escuelas secundarias continúan siendo preocupantemente bajas, poniendo en peligro la capacidad de los jóvenes de adquirir el capital humano necesario para encontrar un empleo adecuado en el sector del mercado formal (Burt 1996).

La vulnerabilidad de los jóvenes a la pobreza y la marginación están bien ilustradas por el número de adolescentes que trabajan para complementar los ingresos familiares. La Oficina Internacional del Trabajo estima que hay al menos 15 millones de niños trabajando en Latinoamérica, y aproximadamente la mitad de estos tienen edades comprendidas entre los 6 y los 14 años (OIT, 1999). Barker y Fontes (1996) calculan que en Perú un 54 por ciento de los adolescentes urbanos y niños de 6 a 14 años trabajan, la mayoría de ellos en el sector informal precario y en condiciones peligrosas.

el término incluye tanto asesinatos intencionados como muertes violentas accidentales (p.ej. homicidios involuntarios,

En muchos grandes centros urbanos, un alto número de niños trabajan en los sectores más peligrosos tales como la prostitución y el tráfico de drogas. Barker y Fontes (1996) afirman que una encuesta realizada en 1992 en Colombia reveló que un 26 por ciento de las mujeres implicadas en la prostitución tenía entre 11 y 20 años. Según Dowdney (2002), al menos 6.000 niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años están implicados en las bandas de tráfico de drogas que controlan la mayoría de las *favelas* de Río de Janeiro. La literatura que desvela las duras condiciones en que trabajan niños y adolescentes es extensa, y la Organización Internacional del Trabajo ha advertido recientemente que la explotación de los niños en la región está en ascenso (OIT/IPEC 2002).

Los jóvenes, en particular aquellos que viven en familias con ingresos bajos y en vecindarios marginales, experimentan traumas y estrés relacionados con las malas condiciones de vida y el hacinamiento, la violencia doméstica, la falta de una educación de calidad, la exclusión del mercado de trabajo, la falta de áreas y equipamientos recreativos, la violencia policial y en muchos casos la discriminación. La necesidad relativa y otros complejos problemas socioeconómicos tienden a concentrarse en la base de la pirámide social, lo que conduce a un elevado número de delitos cometidos por la gente pobre y marginada contra individuos igualmente empobrecidos.

El número de jóvenes implicados en pandillas, actividades criminales y delincuencia está creciendo. En El Salvador, se calcula que la tasa más alta de mortalidad debida a homicidios ocurre entre varones jóvenes de entre quince y treinta y cuatro, el 41 por ciento de los cuales se cometen con un arma de fuego (Cruz, 1998). En Colombia, un 25 por ciento de las personas arrestadas en 1992 eran varones jóvenes de entre 16 y 24

(Barker y Fontes 1996). El homicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes colombianos: de los 112.000 homicidios ocurridos entre 1991 y 1995, 41.000 afectaron a personas jóvenes (Arriagada y Godoy, 1999). Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, en 1980, 59 de cada 100.000 varones de entre 15 y 19 años de edad murieron por heridas de bala en el Estado de Río de Janeiro; en 1990, la cifra se elevó a 190. En Chile, que tiene la tasa de delincuencia más baja de la región, el 94 por ciento de los atracos a mano armada en 1996 fueron cometidos por varones jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. En el mismo país, entre aquellos detenidos por homicidio, 87 por ciento eran varones, 46 por ciento tenían menos de 25 años y 77 por ciento estaban en paro o trabajaban en el sector informal (CEPAL, 2000). Aunque la violencia y las actividades delictivas no están necesariamente asociadas a las pandillas, muchos observadores convienen en que los jóvenes que entran en una pandilla corren un mayor riesgo de cometer delitos.

La violencia es un fenómeno complejo y con muchas caras, y está más allá del alcance de esta tesina explorar las diferentes formas de violencia (política, económica, social y criminal) y abordar todos los aspectos del recrudecimiento de la delincuencia juvenil en Latinoamérica.

En vez de eso, esta tesina tratará de investigar los principales factores estructurales que se encuentran detrás del crecimiento de la violencia juvenil, y de argumentar que la desigualdad y el empobrecimiento, reforzados por las políticas macro-económicas neo-liberales adoptadas por muchos países de la región, junto con la incapacidad de los Estados nacionales de hacer frente a la pobreza y a la exclusión en la distribución de los recursos económicos, políticos y sociales, constituyen las principales razones de la proliferación de la delincuencia juvenil.

El primer capítulo consiste en una breve reseña de la literatura disponible sobre delincuencia y desigualdad. El segundo capítulo proporcionará un análisis de las tendencias delictivas en la región, y una descripción de las actuales formas de delincuencia juvenil. Se prestará especial atención al fenómeno de las pandillas juveniles en El Salvador. El tercer capítulo investigará los factores determinantes de la delincuencia y se centrará en cómo el nuevo modelo económico ha contribuido a generar más pobreza y exclusión, y, en consecuencia unos niveles más altos de delitos violentos. El cuarto capítulo proporcionará una vision general de las principales políticas e intervenciones, evaluará su viabilidad y sugerirá recomendaciones. Abogará por la implementación de sólidas reformas macroeconómicas e institucionales necesarias para hacer frente a las causas estructurales de la pobreza, y la adopción de estrategias integradas e integrales dirigidas a hacer frente a las complejas necesidades de la juventud en riesgo.

Capítulo I – Delincuencia y Desigualdad

1.1 Análisis de la literatura

La violencia, tradicionalmente considerada un asunto de patología criminal y social, es ahora, debido a los altos costes socioeconómicos asociados a la delincuencia, ampliamente reconocida como un problema macro-económico (Ayres 1998), y como un fenómeno a menudo determinado y causado por factores económicos.

Las causas de la delincuencia son diversas y complejas. Los criminólogos, a la hora de explicar las correlaciones y causas de la delincuencia, consideran factores tan variados como la edad, género, raza, herencia, entorno, entorno familiar, políticas y estrategias de reducción de la delincuencia y factores económicos (Wilson y Petersilia, 1995). Durante muchas décadas, muchos han sugerido que la delincuencia es una consecuencia de la desigualdad ecológica (entre zonas) y las desigualdades entre individuos. La mayor parte de esta clase de estudios hace referencia a la relación entre delincuencia y desigualdad identificando la delincuencia como el acontecimiento a explicar y la desigualdad como una de las posibles variables que contribuyen a su explicación. A grandes rasgos, el análisis realizado es que “con un grado de consistencia poco habitual en las ciencias sociales, las personas de clase baja y aquellas que viven en zonas de clase baja tienen tasas de delincuencia oficiales más altas que otros grupos” (Braithwaite, 1979).

La relación entre delincuencia y desigualdad y la incidencia de la delincuencia han sido analizadas desde las fases iniciales de la literatura económica sobre delincuencia.

Becker (1968) defendió que los individuos deciden si cometer un delito económicamente motivado o no teniendo en cuenta tanto los posibles beneficios derivados del delito como los costes, incluido el tiempo de planificación y el tiempo invertido en la ejecución del delito, el coste psicológico de infringir la ley y la probabilidad de ser arrestado y encarcelado.

Pionero en este campo, Fleisher (1966) estudió el papel de los ingresos en las decisiones de los individuos a la hora de cometer actos delictivos. En su estudio econométrico mostró que los ingresos familiares medios más altos en 101 ciudades de los Estados Unidos estaban asociados a unas tasas más bajas de apariciones en los tribunales por parte de los varones jóvenes, y con cifras más bajas de arrestos de varones jóvenes por robo, allanamiento de morada, hurto o robo de vehículos.

Reforzando la teoría de Fleisher acerca de la relación entre delincuencia y desigualdad, Ehrlich (1973) demostró que las tasas más altas de delincuencia estaban asociadas con aquellas familias cuyos ingresos caían por debajo de la mitad de los ingresos medios.

Tanto Fleisher (1966) como Ehrlich (1973) consideraron el efecto del desempleo en las tasas de delincuencia, y defendió que el desempleo y el nivel de educación de la población eran importantes factores de la delincuencia. Específicamente en educación, Ehrlich (1975) afirmó que era posible deducir que ciertas tasas de delincuencia estaban directamente relacionadas con las desigualdades en la escolaridad y formación en el trabajo.

Stack (1984) discutió que los sentimientos de injusticia y desventaja de los menos acomodados conducían a tensiones sociales que, a su vez, podrían provocar el deseo de buscar compensación por todos los medios, incluyendo el cometer delitos.

Un conocido estudio de las tasas de delincuencia realizado en las 125 mayores áreas metropolitanas de los EE.UU. reveló que la delincuencia estaba provocada más por altas disparidades de ingresos dentro de una comunidad que por la proporción de gente pobre que vivía allí (Blau y Blau, 1982).

La obra de Jankowsky (1996) ha sido crucial a la hora de explicar cómo la desigualdad podría desencadenar directamente no sólo delincuencia y violencia económica, sino también no económica. A la hora de analizar el problema de la delincuencia juvenil en los Estados Unidos, afirmó que era la desigualdad, junto con las cambiantes oportunidades económicas, lo que hace que las perspectivas de movilidad social entre los jóvenes parezcan cada vez más remotas, y esto es lo que impulsa a los jóvenes a cometer delitos. La desigualdad económica ha sido pues vista como el principal desencadenante de la delincuencia, pero otros factores asociados tales como la desigualdad en el acceso a servicios sociales básicos, especialmente a una educación de calidad, y la desigualdad en el status social también deben entenderse como influencias más indirectas en la delincuencia.

Freeman (1996), al analizar el recrudecimiento de la delincuencia juvenil en las ciudades americanas, ha defendido que sin “restar importancia a la complejidad de otros factores”, el colapso del mercado de trabajo para varones jóvenes menos cualificados ha contribuido sobremanera a su incrementada participación en actividades delictivas. Según el autor, los individuos implicados en actividades delictivas tienen más probabilidades de estar desempleados, y aquellos implicados en “serios comportamientos violentos”, incluyendo la violencia doméstica, tienen más probabilidades de poner fin a ese comportamiento si consiguen un trabajo.

A la hora de examinar el modelo propuesto por Becker y Ehrlich, Bourguignon (1999), exploró cómo su examen de las relaciones entre pobreza, desigualdad y delincuencia podría aplicarse a la especificidad de los países en vías de desarrollo. En los países industrializados, así como en aquellos en vías de desarrollo, la pobreza relativa se considera “el incentivo más obvio para la delincuencia”, y la volatilidad macroeconómica y la desigualdad en la distribución de la riqueza y servicios de nuevo se identifican como causas fundamentales de una delincuencia alta.

La mayoría de los estudios económicos acerca de los factores determinantes de la delincuencia se han concentrado en datos de nivel micro-económico y se centran principalmente en los Estados Unidos. No obstante, a partir de los 90 el recrudecimiento de las tasas de delincuencia en todo el país y dentro de otros países, en particular en Sudáfrica y Latinoamérica, y la disponibilidad de tasas de delincuencia internacionales ha despertado el interés en estudios transnacionales. Fajnzylber, Lederman y Loaya (1998, 2001), en su estudio de los determinantes de las tasas de delincuencia en Latinoamérica y en el mundo, descubrieron que la desigualdad de ingresos (medida por el coeficiente de Gini) era un determinante crucial de la delincuencia, y que cuanto mayor era la desigualdad, mayores eran las tasas de homicidios intencionados y robos. Cabe destacar como especialmente interesante el estudio de las regresiones que incluía una medición alternativa de la distribución de los ingresos, la parte de las ganancias nacionales percibida por el 20 por ciento más pobre de la población. El coeficiente negativo de esta variable nos dice que las tasas de delincuencia tienden a disminuir a medida que el 20 por ciento más pobre de la población recibe una parte mayor de las ganancias nacionales.

Este estudio también reveló que la tasa de crecimiento del PIB era un determinante significativo para las tasas de delincuencia, teniendo en cuenta que en

momentos de bajos rendimientos económicos se incrementan las tasas de homicidios. Estos resultados demuestran que cuando disminuye la pobreza, bien porque aumenta el crecimiento de los ingresos o porque mejora la distribución de los ingresos, las tasas de homicidios intencionados y robos tienden a caer proporcionalmente. Sorprendentemente, el estudio sugería tentativamente que los logros educativos medios de la población y la tasa de urbanización no eran factores consistentes que determinarían la delincuencia.

En contraste, Londoño y Guerrero (1998), en su análisis de las tasas de delincuencia en la región latinoamericana, concluyeron que la pobreza y la desigualdad, combinadas con bajos logros educativos, eran fuertes determinantes en la proliferación de la violencia.

Buvinic, Morrison y Shifter (1999) sostuvieron que el reciente brote de violencia registrado en Latinoamérica ha tenido su origen en una compleja serie de factores que operan a nivel individual, doméstico y comunitario/social. Concluyeron que las políticas para reducir la delincuencia deberían abarcar sólidas medidas macroeconómicas para generar empleo de calidad y reducir las desigualdades de ingresos, así como sólidas reformas institucionales para mejorar la calidad y accesibilidad de la educación.

Gaviria y Pagés (1999) analizaron las pautas de victimización de la delincuencia en Latinoamérica y defendieron que los altos niveles de concentración urbana y las rápidas tasas de crecimiento de la población típicas de muchas ciudades latinoamericanas eran los responsables de las elevadas tasas de delincuencia. Pese a que los autores no negaron que los factores que contribuyen a la delincuencia pueden ser mucho más complejos, no lograron explicar que el proceso de “hiper urbanización” y la pobreza urbana también eran consecuencias de la desigualdad en la distribución de los activos.

Al observar incrementos en la violencia urbana en las ciudades latinoamericanas, Arriagada y Godoy (2000) también mantuvieron que la desigualdad y la injusticia social se encontraban entre los factores que generaban violencia, aunque no deberían ser considerados como los únicos determinantes de la delincuencia.

Weyland (2003) ha defendido recientemente que las desproporcionadas tasas de delincuencia de la región no son atribuibles a los pronunciados niveles de desigualdad social sino al desempleo, que afecta especialmente a los jóvenes y resulta de un crecimiento volátil y modesto, y a reformas neo-liberales como la liberalización del comercio y la retirada del Estado.

En Latinoamérica, tanto la implantación de reformas de ajuste estructural a mediados de la década de los 80 como las restricciones de gasto público en servicios sociales han contribuido al empeoramiento de la pobreza y la desigualdad, y a provocar un declive significativo de las oportunidades de ingresos y empleo (Altimir 1998). El desempleo y el subempleo, especialmente entre la juventud, son altos en toda la región, y el modelo actual de desarrollo económico no parece poder generar las suficientes oportunidades de empleo en el mercado de trabajo formal. Cuando coinciden desigualdad y pobreza, la tentación de los ciudadanos urbanos pobres de recurrir a la delincuencia se incrementa, y tal y como afirman Becker (1968) y Fajnzylber (1998) la delincuencia tiene sus orígenes en las condiciones económicas y sociales, es decir, en las altas incidencias de pobreza, desigualdad y escasos servicios básicos.

El problema de la violencia juvenil, pese a ser altamente complejo y tener muchas caras, puede describirse como una reacción violenta a una sociedad injusta y desigual que parece ofrecer pocas oportunidades a los jóvenes más desfavorecidos de salir del círculo de pobreza y exclusión.

La literatura sobre la relación entre delincuencia y desigualdad en la región latinoamericana es limitada, y aún están por producir estudios que exploren específicamente las pautas de delincuencia juvenil y desigualdad. La falta de datos fiables constituye un serio problema. El uso de estadísticas de mortalidad como referencias para analizar el nivel de violencia es un método poco fiable debido a que existen muchos casos en los que no se da parte de las defunciones (Short, 1997, citado en Moser 2002). Las diferencias en los métodos de recopilación de datos y los periodos de convocatoria hacen que sea difícil conseguir comparaciones entre distintos países, y las estadísticas oficiales de delincuencia, a menudo obtenidas mediante cifras policiales, también corren el riesgo de estar incompletas. Las encuestas de victimización, que por lo general proporcionan una visión bastante más realista de los delitos violentos, son muy escasas en la región (Moser, 2002), y en cuanto a las encuestas específicas analizando los niveles de pobreza y desigualdad entre niños y adolescentes en la región, también están incompletas. Medir la pobreza y la desigualdad infantil es un ejercicio extremadamente complejo, y actualmente es por esto imposible defender con precisión científica que la delincuencia juvenil sea resultado directo de la desigualdad.

Sin embargo, de la literatura disponible, y de un análisis preciso de las condiciones socio-económicas de la región que muestra que la desigualdad ha aumentado en el continente en la última década, podemos deducir que el recrudecimiento de la violencia juvenil es el resultado de un aumento de la desigualdad.

Existe una clara necesidad de nuevas investigaciones en este asunto, y es de esperar que el recrudecimiento actual de la violencia lleve a un interés renovado en tales investigaciones.

Capítulo II – Delincuencia juvenil en la región

2.1 Tendencias delictivas en la región

Durante décadas, la violencia ha sido un rasgo común de la vida en Latinoamérica. Las guerras civiles en toda Centroamérica y una tradición de brutales dictaduras militares, guerrillas y terrorismo en Sudamérica han contribuido a la formación de la llamada “cultura de la violencia”. El delicado proceso de democratización (que en algunos países no se inició hasta los 80 y los 90) ha provocado la eliminación gradual de la violencia política; sin embargo, una tradición de impunidad, débiles instituciones políticas y desigualdades ha provocado un recrudecimiento de la violencia urbana, un fenómeno que la Organización Panamericana de la Salud ha definido recientemente como la “pandemia social” de finales de los 90 (OPS, 1996).

Cada día, los titulares de los periódicos de toda la región ponen de manifiesto las preocupantes dimensiones de la violencia, y a menudo contribuyen a exacerbar sentimientos de miedo e inseguridad entre la población. Pese a que a menudo los medios son acusados de adoptar un enfoque sensacionalista y de distorsionar y exagerar los hechos, la violencia urbana sigue siendo un fenómeno de gravedad.

En todo el mundo, la tasa media de homicidios es de 5 por cada 100.000 habitantes, y una tasa superior a 10 se considera peligrosamente alta. Para el año en que los datos comparables de homicidios están disponibles para las regiones del mundo (1990), Latinoamérica tenía una tasa de homicidios más de cuatro veces superior a la media mundial: 28,4 por cada 100.000 habitantes (Tabla 1, OPS 1997, citado por

Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). En 1996, El Salvador, con 139 homicidios por cada 100.000 habitantes, se convirtió en el país más violento del mundo (ver Tabla 2.1).

El crecimiento de la violencia, y en particular la creciente implicación de los jóvenes en la violencia económica y social (para las definiciones de violencia, delincuencia y juventud, ver Cuadro 1 y Cuadro 2), bien como víctimas o perpetradores, se ha convertido en una realidad común y en una pesada carga humana, social, ética y económica (Moser, 2002).

Se estima que aproximadamente un 28,5 por ciento de los homicidios en Latinoamérica ocurren entre jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años (Guerrero, 1997 citado en Arrigada y Godoy, 2000). En 1994, un 17 por ciento de todos los homicidios cometidos en Latinoamérica fueron perpetrados por menores (Weaver y Maddaleno, 1999). Entre 1985 y 1994, los homicidios juveniles en Venezuela se incrementaron en un 132 por ciento, de 10,4 por cada 100.000 habitantes a 24,1. Un estudio realizado por la policía de Venezuela entre 1994 y 1996 demostró que el 40,3 por ciento de los detenidos eran menores (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001). En Colombia, los homicidios afectan predominantemente a jóvenes varones de entre 15 y 35 años; en 1996, un 65,2 por ciento del total de las muertes por homicidio fueron de varones de entre 15 y 34 años. En la ciudad de Cali, un tercio de los homicidios en la primera mitad de 1993 fueron cometidos por “*sicarios*” (asesinos profesionales), adolescentes en su mayoría (Gaitán y Díaz, 1994). En la región metropolitana de Río de Janeiro, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud brasileño, la tasa de homicidios se triplicó respecto a la década anterior, elevándose de 23 muertes por cada 100.000 habitantes en 1982 a 63,03 en 1990, un periodo en el que la población de la ciudad se había estabilizado (un crecimiento del 1,13%). En 1990, 190 de cada 100.000

varones de entre 15 y 19 años murieron de heridas de bala en el estado de Río de Janeiro. La violencia juvenil también es responsable de muchas heridas no mortales y de discapacidades. La OPS calcula que por cada niño y adolescente que muere a causa de un trauma en Latinoamérica, 15 son gravemente heridos por la violencia (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001).

El fenómeno de la violencia juvenil ha comenzado recientemente a atraer la atención de gobiernos nacionales, organizaciones comunitarias, agencias externas e incluso del sector privado. La amplia gama de debates abiertos en torno a esta cuestión emana de la voluntad de entenderlo, y de buscar soluciones a un problema que está poniendo serias trabas al desarrollo.

¿Pero quiénes son los delincuentes juveniles en la región? ¿Y por qué tantos jóvenes se implican en actividades delictivas, incluso cuando saben que existe una alta probabilidad de que mueran antes de cumplir los veinticinco o de ser encarcelados durante años? El siguiente apartado tratará de responder a estas preguntas analizando el controvertido fenómeno de las pandillas juveniles en un país de la región: El Salvador.

Cuadro 2.1: Definiciones de Violencia

Definiciones: Violencia, Delincuencia y Juventud
<p>Según una definición proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, la violencia es:</p> <p><i>“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones.”</i></p> <p>La delincuencia se define como un comportamiento que vulnera la ley. Es un comportamiento punible por ley, aunque no necesariamente castigado (Braithwaite, 1979). A su vez, los delitos violentos han sido definidos como cualquier acto que cause una herida o daño físico o psicológico y que vaya contra la ley (Vederschueren, 1996, citado en Moser 2002). La delincuencia, o delincuencia juvenil, son delitos cometidos por personas que aún o han alcanzado la mayoría de edad.</p> <p>Juventud: La Organización Panamericana de la Salud (1994) y la Organización Mundial de la Salud definen la adolescencia como el periodo entre los 10 y 19 años de edad, y la juventud como el periodo entre los 15 y los 24 años de edad.</p> <p>El Banco Mundial define “la juventud en riesgo” como aquellos que hacen frente a condiciones ambientales, sociales y familiares que frenan su desarrollo personal y su plena integración en la economía y la sociedad.</p>

Cuadro 2.2: Categorías de Violencia

<i>Categoría</i>	<i>Definición</i>	<i>Manifestaciones</i>
Política/Institucional	La comisión de actos violentos motivados por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener o mantener el poder político.	Conflictos de guerrillas; conflictos paramilitares; asesinatos políticos; conflictos armados entre partidos políticos; violencia perpetrada por instituciones políticas del Estado tales como el Ejército o la Policía.
Económica	La comisión de actos violentos motivados por un deseo, consciente o inconsciente, de ganancias económicas o de obtener o mantener el poder económico.	Delincuencia callejera; robos de vehículos; robo/hurto; tráfico de drogas; secuestro; asaltos que incluyan el asesinato y la violación durante crisis económicas.
Social	La comisión de actos violentos motivados por un deseo, consciente o inconsciente, de ganancias sociales o de obtener o mantener el poder social.	Violencia interpersonal tal y como el abuso del cónyuge y de menores; asalto sexual de mujeres y niños; discusiones fuera de control.

Fuente: Moser, 2002

Tabla 2.1: Tasas de homicidio en Latinoamérica (por cada 100.000 habitantes)

<i>País</i>	<i>Fin. 70 / Ppios. 80</i>	<i>Fin. 80 / Ppios. 90</i>	<i>En torno a 1995</i>
Guatemala	150
El Salvador	150	117
Colombia	20,5	89,5	65,0
Brasil	11,5	19,7	30,1
Nicaragua	18,3
México	18,2	17,8	19,5
Venezuela	11,7	15,2	22,0
Perú	2,4	11,5	10,3
Panamá	2,1	10,9
Ecuador	6,4	10,3
Honduras	9,4
Argentina	3,9	4,8
Uruguay	2,6	4,4
Paraguay	5,1	4,0
Chile	2,6	3,0

Fuente: OPS, Programa de Análisis de la Situación Sanitaria, 1997, citado en Buvinic, Morrison y Shifter en “Violencia en Latinoamérica y el Caribe: Un marco de acción”, Banco Interamericano de Desarrollo, Marzo de 1999.

Tabla 2.2: Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes entre jóvenes de 10/29 años por país: años disponibles más recientes

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Nº total de muertes</i>	<i>Tasas de Homicidio</i>
Argentina	1996	628	5,2
Brasil	1995	20.386	32,5
Chile	1994	146	3,0
Colombia	1995	12.834	84,4
Ecuador	1996	757	15,9
El Salvador	1993	1.147	50,2
México	1997	5.991	15,3
Nicaragua	1996	139	7,3
Panamá	1997	151	14,4
Paraguay	1994	191	10,4
Uruguay	1990	36	3,6
Venezuela	1994	2.090	25,0

Fuente: OMS, Informe Mundial sobre Violencia y Muertes, Octubre de 2002

2.2 Violencia socioeconómica: El fenómeno de las pandillas juveniles

En los 90 hemos presenciado en toda Latinoamérica un crecimiento exponencial de las pandillas juveniles, también llamadas, según las diferentes zonas y países, *maras*, *bandas*, *chimbas*, *barras*, *parches*, *quadrilhas* o *galeras cariocas*.² Pese a que es difícil calcular la proporción de violencia y delincuencia causada por las pandillas juveniles en la región, no cabe duda de que se han convertido en “un rasgo omnipresente de muchos barrios urbanos, y grandes contribuidores a los altos niveles de delincuencia” (Rodgers, 2003, p. 5).³

Según Rodgers (1999), existen pandillas juveniles en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Jamaica y Puerto Rico. Aunque aún faltan estudios empíricos en estas áreas, la presencia de pandillas juveniles también se ha detectado en Belize, Honduras, Panamá, Uruguay y Venezuela, y más recientemente en Ecuador (Rodgers, 1999; Villavicencio, 1993; Argudo, 1991). En Nicaragua, según datos facilitados por la Policía Nacional, existen *pandillas* en la única ciudad de Managua, con aproximadamente 8.500 afiliados (Rodgers, 2003). En Ciudad de México y Guayaquil existen aproximadamente 1.500 *pandillas* (OPS, 1997). En Chile, se han identificado subculturas con diferentes actitudes y creencias normativas en grupos urbanos y rurales de delincuentes juveniles (Cooper, 1986; 1989; 1992). En Medellín, hay pandillas juveniles con afiliados de tan sólo 8 o 10 años de edad (Arriagada y Godoy, 1999).

² Para estudios tempranos sobre pandillas ver: Thrasher, F. (1927) y su trabajo seminal acerca de los cientos de pandillas juveniles étnicas en Chicago en los años 20; Cohen, A.K. (1955) y Miller, W.B. (1958) y su teoría de frustración de status para explicar el proceso. Para pandillas en los sesenta ver Cloward, R. y Ohlin, L. (1960) y su explicación de la formación de pandillas basada en las oportunidades bloqueadas para lograr el éxito a las que se enfrentan la mayoría de chicos de clase trabajadora y de clase baja. Yablonsky, L. (1959) y su conclusión de que la pandilla representa la manera de que los chicos de clase baja se realicen en el conjunto de la sociedad. Miller, W.B. (1958, 1974, 1976). Para estudios de acciones sobre pandillas ver: Spergel, I. (1984); Short, J. (1990); Cohen, S. (1980, 1987). Para estudios de campo recientes sobre pandillas ver Moore (1978, 1991); Vigil, D. (1988), Horowitz, Cf. R. (1983); Taylor, C. (1990).

En Río de Janeiro hay unos 6.000 niños y adolescentes de edades entre 10 y 18 años involucrados en las bandas de tráfico de drogas que controlan la mayoría de las *favelas* (Dowdney, 2002). El reciente crecimiento de las pandillas en la ciudad está fuertemente asociado al crecimiento de la cocaína y la cocaína crack en los mercados de la droga, la disponibilidad de armas de fuego, altas tasas de desempleo entre los jóvenes, y unos altos niveles crónicos de desigualdad social y económica. En una ciudad en que las tasas de pobreza urbana son extremadamente altas y en la que un treinta y seis por ciento de los adolescentes en los estratos socio-económicos más bajos no estudian ni trabajan, las oportunidades de obtener ingresos ofrecidas por las bandas de tráfico de drogas pueden ser excepcionales.⁴

La asistencia social, el trueque, los acuerdos económicos informales y las economías ilegales se vuelven así sustitutos de las oportunidades lícitas de obtener ganancias, simplemente porque las personas tienen que encontrar una manera de vivir.

El fenómeno de las pandillas juveniles se sitúa tradicionalmente dentro del contexto de las ciudades más grandes de los EE.UU., y las investigaciones empíricas se han limitado predominantemente a este contexto. Para entender la vasta cantidad de literatura sobre pandillas, su papel en las vidas de los jóvenes y el impacto que han tenido en las comunidades en las que son activas es necesario examinar algunos enfoques tempranos a la definición del término “pandilla”.

La obra clásica de Thrasher (1927), *The Gang: A Study of 1,313 gangs in Chicago*, caracterizó la pandilla como un grupo que inicialmente se forma de manera

³ Aquí Rodgers se refiere al fenómeno de las pandillas juveniles en Nicaragua.

⁴ Un vigilante, que pertenece a los niveles más bajos de la jerarquía de las bandas de tráfico de drogas ganaría un salario mensual de entre R\$600 y R\$1000; un tratante entre R\$2000 y R\$3000 y un “gerente” entre R\$10.000 y R\$15.000 (ILO 2002). (US\$ = R\$ 2,50).

“espontánea” y más tarde “se integra a través del conflicto”. Otros criterios para definir a la pandilla incluían la noción de un grupo territorial de personas en contacto mutuo regular, unidas a través del conflicto, conscientes de su pertenencia al grupo y que comparten normas de grupo.

El “mundo” de las pandillas y su formación, estructura y comportamiento a menudo se definen mediante estereotipos. Los estereotipos típicos incluyen la idea de que las pandillas están compuestas por varones adolescentes que son violentos y están motivados por las drogas y el alcohol; sexualmente hiperactivos, temerarios, fríos, traficantes de droga que luchan por los beneficios y la dominación en miserables barriadas de protección oficial en vecindarios de las zonas más deprimidas de la ciudad. Pese a que las pandillas varían en los países y entre ellos (Rodgers, 1999), de una ciudad a otra (Miller, 1974), de una pandilla a otra (Fagan, 1989), e incluso entre camarillas dentro de la misma pandilla (Moore, 1987), todas parecen presentar algunos rasgos comunes (Spiegel, 1984).

Las pandillas representan un intento por parte de los jóvenes de reconstruir sus identidades y de rebelarse contra las instituciones (tales como la familia, la escuela e incluso el mercado de trabajo) que han sido dañados por una desigualdad y una exclusión crónicas (Rodgers, 1999). Son un medio violento de rebelión, una manera de condenar la falta de oportunidades que tienen y la incapacidad del Estado de hacer frente a sus necesidades. Presentan fuentes de ingresos alternativas, y un modo de reconstruir ese sentimiento de seguridad, pertenencia, reconocimiento y participación que la sociedad parece negarles tan categóricamente.

Tabla 2.3 Número de pandillas juveniles en Centroamérica, 1999

	<i>Guatemala</i>	<i>Salvador</i>	<i>Honduras</i>	<i>Nicaragua</i>	<i>Total</i>
Número estimado de pandillas juveniles	n/a	236	407	168	811
Número estimado de miembros de pandillas	n/a	264.600	25.940	2.081	292.621

Fuente: Cifras para El Salvador de PNUD; para Nicaragua del Ministerio de Gobernación; para Honduras de la Sección de Pandillas Juveniles de la Policía Preventiva. Citado en Call, T.C. (2000).

2.3 El aumento de las *Maras*: el caso de El Salvador

El fenómeno de las pandillas juveniles, aunque presente en toda la región, ha asumido dramáticas proporciones en Centroamérica (ver Tabla 2), y en particular en El Salvador, donde en los últimos años el número de miembros de las *maras* y el nivel de violencia criminal se han disparado.

Hoy día El Salvador, con su tasa de homicidios de 117 por cada 100.000 personas, es uno de los países más violentos del mundo, y el más violento en la región latinoamericana (Rodgers 1999). Se calcula que la tasa de mortalidad más alta debida a homicidios ocurre entre varones jóvenes de entre 15 y 34 años, el 41 por ciento de los cuales se cometen con un arma de fuego (Cruz 1998). Según Cruz (1998), “el problema de la delincuencia es de tal magnitud que los salvadoreños están más preocupados por la violencia criminal de lo que lo estaban durante la guerra.”

La violencia urbana, una manifestación de las graves desigualdades económicas y sociales de la sociedad salvadoreña, es en verdad la forma más predominante de violencia en El Salvador. El factor que más contribuye a esto es el crecimiento de las pandillas juveniles (*maras*) en sus zonas urbanas tras el fin de la guerra civil, lo que, según

Vasquez (1999, p. 1) constituye “uno de los problemas cultural-generacionales más serios e importantes del país en la década de los 90.”

En El Salvador, se estima que en 1996 aproximadamente unos 20.000 jóvenes estaban afiliados a pandillas (IUDOP 1998; De Cesare 1998), con el 70 por ciento perteneciente a las dos pandillas principales, *Mara Salvatrucha* (MS) y *Los De La 18*.⁵ Para el año 2000 (Santa Cruz, Giral, Concha-Eastman 2001, p.13), el número ascendía a 30-35.000 (de una población de 6,4 millones).

Pese a que las pandillas juveniles existían en El Salvador desde los años 50, la deportación de miembros de pandillas salvadoreños desde los Estados Unidos en los 90 trajo un nuevo estilo de violencia y un componente transnacional a una sociedad que ya estaba marcada por la violencia (IUDOP 1998, p.695, De Cesare 1998, p.25, Rodgers, 1999).

Las pandillas juveniles en El Salvador son conocidas por su extrema violencia, organización bien estructurada, posesión de armas letales (incluyendo M-16s, granadas M-3 y lanzamisiles RPG-2), y un fuerte consumo de narcóticos y alcohol. La violencia de pandillas es responsable de un alto porcentaje de homicidios, asaltos, secuestros, robos, violaciones y otros delitos violentos en las áreas urbanas del país.

Estudios recientes sobre las *maras* han revelado que un 82,9 por ciento de los encuestados vive en condiciones de pobreza, y que el 74,5 por ciento, pese a tener una media de ocho años de escolarización, están desempleados. Los pocos que trabajan están sobre todo en empleos casuales sin acceso a ningún tipo de seguridad social o garantías de seguridad laboral (Smutt 1998). Existen diversas razones por las que los jóvenes

⁵ Salvatrucha significa “El Salvador ha de vivir”; el nombre M18 está tomado de la calle 18 en Los Ángeles, lugar donde se formó la banda. Otras bandas que operan en el país son: Máquina, Mao Mao, Lenox, Virginia Street Locos y Calle 41.

deciden unirse a las pandillas. En una encuesta realizada en San Salvador por el IUDOP (Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana), un 60 por ciento de los encuestados afirmó que se habían unido a una pandilla por la complicidad y la amistad que ofrecía; un 46 por ciento porque “*les gustó el vacil*”, y un 22 por ciento por problemas con sus familias.

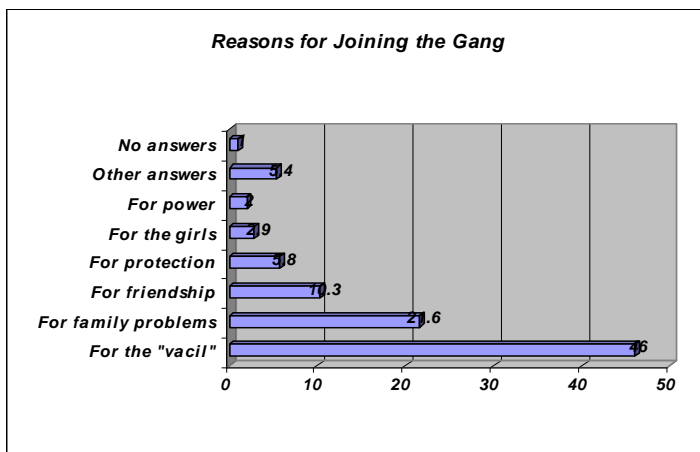
Sin embargo, cuando se les preguntó por su futuro, casi el 85% de los encuestados respondieron que les gustaría “calmarse”, dejar las drogas y la violencia, encontrar un trabajo y empezar una familia. En los últimos años, una serie de autores han analizado las razones tras la proliferación de pandillas en El Salvador. Las explicaciones más comunes que proporcionan son: (1) el largo conflicto, que dejó grandes cantidades de armas en manos de la población civil; (2) la dificultad de re-insertar a los ex-combatientes en el grueso de la sociedad; (3) la arraigada cultura de la violencia en la sociedad salvadoreña; (4) la transición del autoritarismo a la democracia; (5) la deportación desde los Estados Unidos de jóvenes infractores que han sido arrestados por ser miembros de pandillas; (6) el bajo status socio-económico de los miembros; (7) la falta de vínculos fuertes entre padres e hijos; (8) el alto nivel de pobreza y desigualdad; y (9) la falta de oportunidades de empleo y servicios sociales adecuados (Moser, 2002; Rodgers 1999; Smutt y Miranda, 1998; Cruz, 1998; OPS 1997).

Si bien todos los factores interrelacionados especificados arriba pueden explicar la existencia del fenómeno, y especialmente su alarmante escala, lo que hay que subrayar es que las pandillas se forman y proliferan en zonas desfavorecidas y marginadas en las que las tasas de desempleo se sitúan por encima de la media; donde prosperan las redes informales e ilegales, y donde las estructuras socioeconómicas existentes, en lugar de

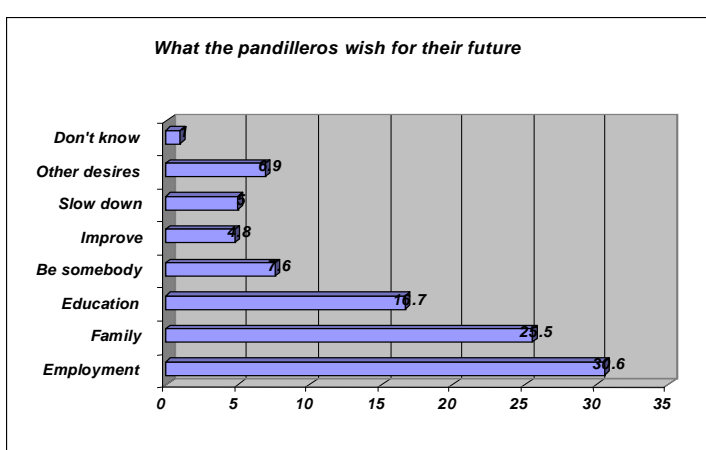
producir oportunidades viables de integración sólo contribuyen a generar más exclusión y vulnerabilidad.

En El Salvador, donde un 44,6 por ciento de la población vive en la pobreza, donde el desempleo y el subempleo rondan el 40 por ciento, y donde el coeficiente de Gini está entre los cinco más altos del mundo (PNUD, 2000), las *maras* representan la respuesta de la juventud a la injusticia social y el bloqueo de las oportunidades.

Gráfica 2.1 – Razones para unirse a la pandilla



Gráfica 2.2 – Lo que esperan del futuro los miembros de la pandilla



Fuente: Cruz, J.M. (1998) Problemas y expectativas de los jóvenes pandilleros desde su propia perspectiva – Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Capítulo III – Los Determinantes de la Delincuencia Juvenil

A la hora de explicar el surgimiento de la violencia juvenil en la región, distintos autores (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999; Moser, 1999, 2002, Weyland, 2003, Guerrero, 1998, Arriagada y Godoy, 1999) se han centrado en un “enfoque epidemiológico”, tratando de identificar todos estos factores que, actuando simultáneamente, podrían instigar o producir violencia (Tabla 3.1).

Aunque el enfoque epidemiológico ciertamente ofrece un análisis exhaustivo de la violencia juvenil, esta disertación defiende (sin quitar importancia en modo alguno a la variedad y la complejidad de factores que podrían producir violencia) que sin embargo el reciente recrudecimiento de la delincuencia juvenil tiene su origen en el incremento de los niveles de desigualdad y exclusión provocados por el nuevo modelo económico adoptado por la inmensa mayoría de los países de la región.

3.1 Las dimensiones de pobreza y desigualdad

Que la pobreza en sí misma pueda constituir un factor determinante de la delincuencia es discutible. Los países más pobres de Latinoamérica, Haití, Bolivia y Perú no han presenciado un crecimiento exponencial de la delincuencia en la última década. En la zona más pobre de Brasil, el nordeste, las tasas de delincuencia son extremadamente bajas, y la delincuencia y violencia están concentradas en las grandes áreas metropolitanas de Sao Paulo y Río de Janeiro (Zaluar, Noroña y Albuquerque, 1994). En Venezuela, la mayoría de los homicidios ocurren en las áreas metropolitanas de Caracas, y en los ricos estados de Carabobo y Aragua, mientras que zonas pobres

como Apure, Trujillo y Sucre parecen ser inmunes a la *pandemia* (Briceño-León y Pérez Perdomo, 2000).

Así, como hemos enfatizado anteriormente, la violencia urbana no tiene su origen en la pobreza *per se* sino, tal y como ha sido demostrado por estudios estadísticos e investigaciones (Fajizylber, Lederman y Loayza, 1998), en el empobrecimiento y la desigualdad. En Chile, un estudio reciente realizado en la región metropolitana ha calculado que un incremento de sólo un punto en la tasa de desempleo es suficiente para provocar un incremento del 4 por ciento en los delitos contra la propiedad (García, 1997 en Arriagada y Godoy, 1999). El incremento de los delitos violentos en la región está pues estrictamente ligado con la urbanización de la pobreza y con el aumento de la desigualdad y la polarización social provocada por la introducción de reformas de ajustes estructurales.

Desde los 80, las estructuras económicas de los países latinoamericanos han registrado transformaciones que han cambiado significativamente sus mercados de trabajo y provocado un dramático aumento en los niveles de pobreza. Los programas de ajuste estructural implementados bajo la estricta supervisión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han conllevado recortes en el empleo público, la privatización de empresas y servicios públicos, la eliminación de los subsidios de alimentación y combustible y fuertes recortes del gasto público. La introducción de la liberalización del comercio, la desregulación del mercado y la redefinición del papel del Estado junto con la adopción de un modelo de desarrollo orientado a las exportaciones basado en los productos de consumo no han impulsado las economías tal y como esperaban ni han mejorado las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad (Cornia, 1994).

Los costes sociales han sido muy fuertes en toda la región, y pese a que en los 90 la mayoría de los países se recuperó de las crisis económicas y de inflación de los 80, la pobreza y la desigualdad se mantuvieron altas. Concretamente en 1997, el conjunto de Latinoamérica registró su mejor actividad económica desde 1982, creciendo un 5,3 por ciento (Londoño y Székeley, 1997, CEPAL, 1998). En un estudio realizado por el Banco Mundial, Deininger y Squire (1996) demostraron que durante los 90, el 10 por ciento más rico de la población en la región recibió un 40 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 30 por ciento más pobre sobrevivía con sólo un 7,5 por ciento de los ingresos totales (Banco Mundial, 2001). En 1998, el índice Gini aumentó y alcanzó el mismo nivel de 1970 (0.52). A pesar de las tendencias positivas de crecimiento, en 1998 el 24 por ciento de la población latinoamericana, unos 220 millones, vivía con menos de un dólar al día, sugiriendo que el proceso de crecimiento se ha llevado a cabo de un modo exclusivo y no incluyente (Ayres, 1998). El crecimiento en los 90 se concentró principalmente en las exportaciones intensivas de capital y en modernos servicios en los que las tasas de productividad del trabajo son altas pero la generación de empleo no cualificado es baja. Como resultado, mientras que los trabajadores con estudios se beneficiaban de la liberalización económica y un crecimiento más rápido, los trabajadores sin estudios veían cómo se estancaban sus salarios.

El nuevo modelo económico tampoco fue capaz de generar empleo. El desempleo subió del 5,7 por ciento en 1990 al 9,5 por ciento en 1999, y gran parte de la población urbana se vio obligada a encontrar empleo en el sector informal de la economía. CEPAL (1999) calcula que la “informalización” del mercado de trabajo se hizo tan manifiesta que entre 1990 y 1997, por cada diez trabajos creados en la región, siete se originaban en el sector informal de la economía. Hoy, se estima que aproximadamente un 40 por ciento de

la población trabaja en el sector informal sin acceso a ningún tipo de pensión, beneficios sanitarios o crédito.

El impacto de las reformas en los jóvenes pertenecientes a las clases socioeconómicas más bajas ha sido más severo. En entornos urbanos, donde la pobreza es más alta en los hogares llevados por mujeres (30,4) y donde un creciente número de niños vive con madres solteras, se ha estimado recientemente que el 44 por ciento de los niños viven en la pobreza. Además, en la época en la que nacieron los jóvenes que actualmente están estudiando, entre 1976 y 1985, todos los países latinoamericanos recortaron el gasto público en servicios sociales (CEPAL, 2001), agravando las formas de exclusión que se hicieron especialmente evidentes en los sectores de la educación y el empleo (Blanco, 1992).

3.2 Acceso desigual a la educación

La educación, que debería representar el mejor instrumento para dotar a los jóvenes más pobres de mejores oportunidades, está ahora en peligro de reforzar las desigualdades existentes. En los albores del siglo XXI, el acceso a la educación de calidad en la región latinoamericana aún parece ser un privilegio reservado a las clases más ricas. Aunque la educación primaria es gratuita y obligatoria para todos, las tasas de abandono siguen siendo altas, y aproximadamente un 30 por ciento de los niños no la termina.

El número de niños que termina la escuela secundaria también es preocupantemente bajo e insuficiente para garantizar un suministro de mano de obra cualificada para unos mercados cada vez más competitivos. De media, aproximadamente

un 37 por ciento de los adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años deja la escuela, y la gran mayoría de ellos proviene de familias con bajos ingresos. A pesar de estos desesperanzadores datos, los programas sociales dirigidos a animar a los adolescentes pobres y marginados a completar sus estudios secundarios aún están por activarse (CEPAL, 2001).

El acceso desigual a la educación y los lentos esfuerzos a la hora de proporcionar una educación secundaria para todos los estratos de la población han causado un aumento de las desigualdades y, según Londoño (1997), se ha convertido en el contribuyente principal del crecimiento de la pobreza semi-permanente que atormenta a la región.

Para los niños en riesgo, dejar la escuela también aumenta la probabilidad de que se involucren en comportamientos que pongan en peligro su salud y actos violentos (Pirie, Murray y Leupker, 1988; Chavez, Edwards y Oetting, 1989; Valois et al., 1993). Unos logros educativos bajos también se traducen en la entrada prematura al mercado laboral, con una alta probabilidad de convertirse en desempleados y por tanto sufrir marginación económica.

3.3 Jóvenes y desempleo

Muchos años de altas tasas de crecimiento de la población y una educación inadecuada han dejado la región con un exceso de mano de obra no cualificada, haciendo que el **desempleo entre los jóvenes** aumente a niveles sin precedentes. En 1995, los jóvenes desempleados representaban el 40-50 por ciento del número total de desempleados en Argentina, el 49 por ciento en Brasil, el 44 por ciento en Colombia, el

43 por ciento en El Salvador, el 59 por ciento en Honduras y el 51 por ciento in México (CEPAL, 2001).

En todos los países de la región, se ha observado que el desempleo entre los jóvenes es mayor entre los jóvenes más desfavorecidos, indicando que el desempleo juvenil no se debe únicamente a un excedente de mano de obra, sino a un acceso desigual a los servicios y oportunidades (CEPAL, 2000).

La “desaparición del trabajo” (Wilson, 1997), o más precisamente la desaparición de los puestos de trabajo no cualificados, especialmente asociada a otros factores de riesgo, como logros educativos bajos y una escasez (o no existencia) de servicios sociales, es una condición extremadamente peligrosa para los jóvenes marginados, quienes optan fácilmente por actividades ilícitas para generar ingresos.

En el caso de El Salvador, hemos visto que la mayoría de miembros de pandillas tienen ocho años de escolarización, y carecen de un empleo estable. Puede que esto nos ayude a superar varios prejuicios contar los “grupos de iguales sin supervisión que son socializados por la calle” (Moore, 1998) y a reconocer que las pandillas (así como otras formas de delincuencia juvenil) no sólo emergen del salvajismo juvenil, sino también, y de manera especial, en respuesta a fuerzas económicas e institucionales más inmediatas.

3.3 Otros factores correlativos

Además de la pobreza y la desigualdad, existen otros muchos factores individuales, domésticos, comunitarios y sociales que, cuando se combinan con la pobreza, la desigualdad y las frustraciones derivadas de estas condiciones, contribuyen al

incremento de la violencia juvenil. El siguiente apartado es sólo un breve esbozo de lo que se reconocen como otros determinantes estructurales de la delincuencia juvenil.

La disponibilidad y proliferación de armas de fuego se han convertido en serias causas de la delincuencia juvenil. Hoy día, las armas son una parte central del cambiante panorama de la violencia juvenil. En muchas ciudades en la región, los adolescentes poseen y llevan armas, a menudo por un deseo de ser respetados y temidos. Las armas fomentan la violencia, y virtualmente todos los aumentos de las tasas de homicidios entre personas de 10 a 34 años pueden ser atribuidos al uso de armas de fuego. En El Salvador, donde la disponibilidad de armas está relacionada con el contexto post-conflicto, existen aproximadamente 250.000-400.000 armas de fuego en manos de civiles (Cruz y Beltrán, 2000). En sólo 1998, seis de cada diez muertes violentas en el municipio de San Salvador fueron resultado de armas de fuego o explosivos (Cruz y Beltrán, 2000). En Colombia, se calcula que aproximadamente uno de cada cuatro varones posee un arma (García-Peña Jaramillo, 1995). Entre 1985 y 1994, en Colombia, los homicidios juveniles se incrementaron en un 159 por ciento, de 36,7 por cada 100.000 habitantes a 95, con un 80 por ciento de los casos al final de este periodo implicando armas (Informe de Desarrollo Mundial sobre Violencia y Salud).

La abundancia de armas letales está vinculada a la expansión del **mercado de la droga**. Las armas son herramientas necesarias en el negocio de la droga, empleadas para proteger el dinero ganado, proteger a los tratantes, zanjar disputas y defender el territorio (Goldstein, 1985, 1989). En toda la región, el número de jóvenes que consumen sustancias narcóticas o están involucrados en su venta va en aumento (OIT-IPEC 2002, CEPAL, 2001). En muchos grandes centros urbanos de la región latinoamericana estamos presenciando lo que Dowdney (2002) define como una “normalización” del tráfico de

drogas. Por ejemplo, en zonas pobres de Río de Janeiro, los niños están tan expuestos a las drogas que consideran el tráfico de drogas y la lucha como modos de vida casi “normales” y legítimos. Para muchas personas jóvenes, desempleadas y a menudo marginadas, el tráfico de droga es también una fuente fácil de ingresos, y ofrece una oportunidad de ganar status social.

En el contexto latinoamericano, la proliferación de armas, la expansión del mercado de la droga y un incremento en los niveles de violencia juvenil están asociados con lo que comúnmente se conoce como la **“ausencia del Estado”**. La “ausencia del Estado” se refiere principalmente a la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley, combatir la corrupción y proteger a las clases bajas de los abusos de poder. Hoy día, las marcadas desigualdades sociales, además de excluir social y económicamente a grandes segmentos de la población, están también socavando el estado de derecho puesto que las élites exigen privilegios e infringen la legislación formal. Al mismo tiempo, las clases bajas a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda cuyos derechos no se protegen. La corrupción y la brutalidad policial han contribuido a exacerbar el problema. Noronha et al. (1999), en su estudio sobre la violencia que afecta a varios grupos étnicos en Salvador, Bahía, concluyeron que una insatisfacción generalizada con la policía y el sistema judicial incrementaron el uso de modos de justicia no oficiales. En Río de Janeiro, de Souza Minayo (1999) descubrió que el mayor perpetrador de violencia contra los jóvenes era la Policía. Sanjuán (1998) sugirió el hecho de que la justicia dependiera de la clase socio-económica fuera un factor fundamental en la proliferación de la violencia entre los jóvenes marginados.

En suma, los problemas económicos exacerbados por los programas de ajustes estructurales, el desempleo, un acceso desigual a la educación y la falta de un sistema de

seguridad social dirigido a proteger la población de la vulnerabilidad y el riesgo, son aquí identificados como las causas de la delincuencia juvenil en la región (Weyland, 2003; OPS, 1996).

Las experiencias de desarrollo producidas por la interacción de estos factores son devastadores para muchos adolescentes. Los adolescentes dependen de las familias, vecindarios, escuelas, sistemas sanitarios, el mercado de trabajo y unos servicios sociales efectivos, y todas estas instituciones y servicios sociales están ahora sometidos a muchas presiones. Un vasto número de niños en Latinoamérica está creciendo en zonas severamente afligidas y caracterizadas por la pobreza y la delincuencia, lo que les expone al abuso de drogas, la delincuencia, las rupturas familiares, la discriminación y la falta (o no existencia) de oportunidades de movilidad social. Los programas sociales específicamente diseñados para reintegrar a los jóvenes marginados son insuficientes en toda la región, y las políticas anti-pobreza dirigidas a sacar a las familias de las privaciones económicas y sociales siguen siendo bastante inadecuadas. La discriminación y la sensación de impotencia experimentados por los jóvenes sin recursos y sus familias también sugieren que en muchos países de la región el problema de la exclusión social no ha recibido la suficiente atención. En Brasil, por ejemplo, no se creó un Programa de Acción Afirmativa por Decreto Presidencial hasta mayo de 2002 (IDB, 2003). En Perú, la discriminación racial no se declaró ilegal hasta 1997.

Mejorar estas condiciones requerirá masivos cambios económicos y sociales. Los desafíos son grandes y mientras tanto, la población juvenil en riesgo crece.

Tabla 3.1: El Modelo Epidemiológico de la Violencia

Individual	Doméstico	Comunitario	Social e Institucional
Edad Género Biológico Psicológico Nivel educativo Nivel socio-económico Status de empleo Abuso de sustancias Exposición temprana a la violencia	Presencia de violencia en el hogar Tamaño del hogar / hacinamiento Nivel educativo Nivel socio-económico Status de empleo Actitud parental Abuso de sustancias Dinámica y normas del hogar	Nivel de pobreza del vecindario Nivel de delincuencia (presencia de pandillas) del vecindario Infraestructura (alumbrado público, servicios básicos, centros recreativos, condiciones de la vivienda, escuelas, centros de empleo, etc.) Historial de violencia social (conflictos) Nivel de empleo Falta de organización comunitaria (capital social débil o inexistente) Transiciones y movilidad Disponibilidad de drogas y armas Violencia en los medios Normas culturales Instituciones de control social (Policía, iglesia, organizaciones vecinales, grupos comunitarios, etc.)	Pobreza Desigualdad Racismo Sistema Judicial Servicios sociales Sistema de protección social Normas y creencias culturales Tráfico de drogas Corrupción

Capítulo IV – Políticas y recomendaciones

No existen soluciones fáciles al problema de la delincuencia, y en especial al de la delincuencia juvenil. Las causas de la violencia infantil y juvenil son complicadas y tienen muchos aspectos, tantos que casi resulta abrumador, y por ello deben afrontarse a distintos niveles y de manera simultánea por múltiples sectores de la sociedad. Esto incluye hacer frente a los factores individuales, domésticos y comunitarios, pero especialmente a factores más amplios (culturales, sociales, políticos y económicos) que contribuyen a la proliferación de la violencia (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).⁶ Sin estas intervenciones estructurales, el problema de la violencia juvenil en la región podría ser contenido, pero es poco probable que pudiera ser erradicado.

Aunque existen diferencias importantes en el modo en que los distintos países formulan políticas de intervención, una observación que podemos realizar al respecto es que en los últimos años hemos presenciado un cambio en las formas de pensar a la hora de hacer frente a la violencia. Durante mucho tiempo, el foco de atención estaba en reaccionar a la violencia juvenil con represión – el enfoque de la justicia criminal – y en prevenir comportamientos anormales (como los embarazos adolescentes, las adicciones a las drogas y el alcohol, y el abandono de la escuela) en vez de intentar prevenirlos implementando cambios estructurales para corregir las desigualdades.

Sin embargo, el reciente brote de delincuencia juvenil ha estimulado más estudios del fenómeno, y se han adoptado nuevos enfoques a la hora de comprender y contener el problema. La descentralización, recientemente introducida en muchos países de la región,

ha permitido a las autoridades locales hacerse responsables del diseño y la implantación de políticas de prevención de la violencia.

Este nuevo modelo, fuertemente defendido y apoyado por todos los donantes internacionales de mayor relevancia, conlleva formas de coordinación interinstitucional, participación de la comunidad, y asociaciones del gobierno local con la sociedad civil y el sector privado. En toda la región existen ejemplos en los que las intervenciones locales están contribuyendo a promover la seguridad, reforzar el capital social y la ciudadanía, y reinsertar a los jóvenes en riesgo. La creación de patrullas comunitarias, proyectos de regeneración urbana, empleo local y programas de micro-créditos, y formación en derechos humanos para los oficiales de policía son sólo algunas de las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años. Pueden observarse unos cuantos ejemplos de intervenciones locales con éxito en los cuadros 4.1 y 4.2. Si bien este tipo de enfoques tienen muchos puntos a favor, también pueden tener algunas serias desventajas.

La delincuencia juvenil tiene su origen en múltiples formas de vulnerabilidad y exclusión, lo que a su vez tiene su origen en un modelo de desarrollo económico que perpetúa y refuerza la desigualdad. Así, los esfuerzos a nivel de la comunidad corren el riesgo de ser frustrados si no se hace frente a las causas de la delincuencia juvenil de manera simultánea. Estudios recientes del problema de la delincuencia juvenil en la región parecen estar de acuerdo en que las políticas de intervención deberían incluir reformas macroeconómicas y programas sociales capaces de reparar esas desigualdades crónicas por las cuales desgraciadamente es conocida la región latinoamericana (Fanjizylber et al. 1998; Buvinic et al. 1999).

⁶ Recientemente se han realizado varios esfuerzos por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS para prevenir y combatir la violencia juvenil en la región. Ambas agencias adoptan un “modelo epidemiológico”. La Tabla 4.1 resume las principales intervenciones sugeridas por este enfoque.

Estos incluyen la introducción de políticas de redistribución de la riqueza mediante impuestos y una distribución de los activos más igualitaria, la implantación de estrategias de reducción de la pobreza a nivel nacional, la promoción de formas de gobierno competentes, una mediación efectiva entre economías domésticas e internacionales con la creación de nuevas oportunidades de empleo, la introducción de un sistema de seguridad social sólido, y la promoción y defensa de los derechos humanos. Las recomendaciones de políticas que realizo a continuación no son exhaustivas, y simplemente representan una indicación de las medidas estructurales más urgentes necesarias para alejarse del acuerdo global basado en el consenso de Washington.

Protección social

Unas redes de protección social eficaces pueden combinar programas de reducción de la pobreza que protejan a los pobres estructurales y garanticen su acumulación de capital humano, con programas de asistencia para aquellos segmentos de la población que se han visto más gravemente afectados por el trastorno de la economía. Los programas en el mercado de trabajo también pueden contribuir a reinsertar a los trabajadores en nuevas actividades productivas y proporcionar formación a jóvenes desempleados. Por último, unas pensiones mínimas para los hogares sin recursos y un seguro de salud y desempleo proporcionarían una mejor protección frente a la vulnerabilidad y el riesgo y promocionarían un modelo de desarrollo más igualitario y justo. La política familiar también ha de ser reforzada y, de acuerdo con las provisiones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, debería introducirse un derecho legal a beneficios para el niño (Townsend, 2002).

Mejorar los ingresos tributarios

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gasto latinoamericano es bajo, principalmente debido a ineficiencias institucionales a la hora de aplicar y recaudar impuestos (IDB, 2003). Sin embargo, la reducción de exenciones fiscales, la reducción de impuestos laborales a fin de promover la formalización de firmas y reducir el desempleo y la mejora de la capacidad de los gobiernos locales de recaudar impuestos sobre el patrimonio podría contribuir a generar más ingresos fiscales.

Mejorar el gasto social: Educación

Pese a que en los últimos años todos los países incrementaron su presupuesto de gasto social (que subió de un 7,7 por ciento del PIB en 1970 a un 12,3 por ciento en 1999 - BID, 2003) las ganancias sociales para los estratos más bajos de la población han sido limitados.

Las inversiones en capital humano en particular han sido muy inadecuadas. Según Londoño (1997), la adopción de un modelo dinámico de expansión de capital humano contribuiría dramáticamente a eliminar las excesivas desigualdades de la región. La expansión de la educación latinoamericana ha sido lenta y discriminatoria para con el sector más pobre de la población, y el dinero ahorrado para la educación secundaria ha sido empleado en aumentar la cobertura universitaria (Moreley, 2001). Esta política deliberadamente discriminatoria ha dado lugar a unas disparidades salariales inmensas, aumentando la polarización social y la exclusión sistemática de los jóvenes sin recursos.

La demanda de mano de obra altamente cualificada en las economías modernas no puede ser cubierta por una pequeña élite intelectual, sino que requiere la excelencia a través del sistema educativo. El objetivo debería ser tratar de acercar los porcentajes de aquellos que entran en el mercado laboral con al menos estudios secundarios al 100 por cien.

Generación de empleo

Las políticas macroeconómicas deberían hacer frente al inmenso desafío creando nuevas oportunidades de trabajo en el mercado de trabajo formal.

Bajo las reformas neo-liberales, el trabajo, más que un mecanismo de acceso al bienestar y al progreso de las familias, se ha considerado una variable de ajuste automático para la macro-economía. En Latinoamérica, como es el caso de muchos países en vías de desarrollo de todo el mundo, casi la mitad de la población activa está empleada en el sector informal de la economía, y la amplia mayoría de los países ni siquiera cuenta con un sistema sólido de protección. Las *maquiladoras*, que especialmente en Centroamérica han sido una de las nuevas estrategias gubernamentales para vincular las economías nacionales y los mercados globales, a menudo suponen una forma altamente explotadora de empleo. El desafío de proporcionar empleo a los jóvenes es aún mayor. En Latinoamérica, la juventud representa aproximadamente un 30 por ciento de la población. La absorción de esta fuerza de trabajo en trabajos dignos requerirá profundos cambios en la estructura económica de la región y el diseño de políticas integradoras, que podrían promover el acceso igualitario a la educación secundaria y las oportunidades de empleo.

Promover la inclusión

Las políticas para promover la ciudadanía e incrementar la voz y el poder de los más desfavorecidos, en especial de los jóvenes, son imperativas. Como ya se ha mencionado brevemente con anterioridad, sólo unos pocos países en la región han dado pasos en esta dirección. Sin embargo, la creación de una sociedad más social y más justa requerirá mayores esfuerzos y en especial una voluntad política más rigurosa. La reciente ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por todos los países de la región podría representar un buen punto de partida para la promoción de políticas inclusivas para niños y adolescentes desfavorecidos.

La educación de los jóvenes y su evolución a ciudadanos productivos es hoy uno de los mayores desafíos que afronta el continente latinoamericano. Aunque se han realizado mejoras significativas, millones de adolescentes siguen viviendo en la pobreza, excluidos de la sociedad, y atrapados en círculos viciosos de ilegalidad e informalidad. Reinsertar a estos jóvenes en el grueso de la sociedad no es sólo cuestión de alcanzar un crecimiento sostenible: también es cuestión de elegir un modelo de desarrollo más digno, humano y justo.

Una institución centralizada específicamente dedicada a analizar y hacer frente a los problemas de la juventud, a ponerlos de actualidad, a marcarse objetivos y realizar un seguimiento de los resultados y a coordinar esfuerzos para la inclusión y el desarrollo global de la juventud sería altamente beneficiosa.

La violencia juvenil es un problema social, y como tal puede resolverse mediante políticas de intervención efectivas. Como defendió Smutt (1998), “los seres humanos no nacen violentos, se hacen violentos en contextos violentos.”

Cuadro 4.1: Las Comunas, Ciudad de México

El Gobierno de Ciudad de México ha implantado recientemente “Las Comunas”, un proyecto que ofrece formación profesional a jóvenes desempleados y marginados que desean reinserirse en la sociedad y encontrar una oportunidad lícita de ganar un sueldo regular.⁷

Sin embargo, el actual nivel de intermediación con empresas locales no es prometedor. Las pequeñas y medianas empresas a menudo no tienen la capacidad de aumentar su plantilla y los prejuicios y discriminación hacia los jóvenes marginados tardan en desaparecer. El proyecto sigue en pie (se lanzó en 1999) y aún es pronto para juzgar su viabilidad. Su éxito no obstante dependerá del nivel de consenso y cooperación social que sea capaz de conseguir el gobierno local con todas las partes sociales.

Cuadro 4.2: Homies Unidos, San Salvador, El Salvador

Homies Unidos es la primera organización de este tipo compuesta de ex miembros de pandillas. Se fundó en 1996 y está compuesta por jóvenes que anteriormente pertenecían a pandillas rivales, como *Calle 18* y *La Mara Salvatrucha*. El objetivo de la organización es disminuir la violencia y reinserter a los miembros de las pandillas en la sociedad mediante programas educativos. El programa de Homies Unidos incluye discusiones de grupo sobre prevención de la violencia, clases de inglés y de arte, formación en derechos humanos y apoyo psicológico. Homies Unidos trabaja ahora en colaboración con el Gobierno de El Salvador para prestar apoyo a los miembros de pandillas deportados de los Estados Unidos.

Tabla 4.1 Estrategias de prevención de la violencia

Individuales

Programas de desarrollo social; proporcionar incentivos a los jóvenes en riesgo de violencia que finalicen sus estudios secundarios

Relacionales

Formación a los padres; visitas a domicilio; programas de mentores; colaboración entre el hogar y la escuela para promover que los padres se involucren; terapia familiar

Comunitarios

Mejorar la calidad de la educación, mejorar las infraestructuras escolares; facilitar programas extra escolares para ampliar la supervisión de los adultos; promover las actividades extraescolares; implantar un programa de prevención de pandillas; enseñar a los trabajadores de la sanidad y a otros trabajadores sociales a identificar a jóvenes con un alto riesgo de violencia; implantar programas de prevención y rehabilitación de drogas; mejorar la vivienda; construir áreas recreativas y centros deportivos; mejorar la calidad y disponibilidad de instalaciones de cuidados infantiles; formar a los miembros de la comunidad y las fuerzas de seguridad en recursos humanos; introducir vigilancia comunitaria.

Sociales / Institucionales

Introducir un sistema de seguridad social; implantar programas sólidos anti-pobreza; abolir todas las prácticas y leyes discriminatorias; reducir la desigualdad; reducir la violencia en los medios; reformar el sistema educativo; mejorar el acceso a la sanidad; crear más y mejor empleo; mejorar la judicatura; reducir la disponibilidad de armas; reducir el tráfico de drogas; lanzar campañas públicas de información; reforzar y mejorar la policía y el sistema judicial

Fuente: Buvinic, M., Morrison, A. y Shifter M., “Violence in Latin America and the Caribbean: a Framework for Action”, IDB 1999.

⁷ El proyecto está basado en el modelo de las “Misiones locales”, un programa especialmente exitoso implantado por el Gobierno francés desde la década de los 80 para combatir la exclusión social entre los jóvenes sin empleo.

Conclusiones

Una conclusión importante emerge de esta disertación: las causas aparentes de la ola de delincuencia en Latinoamérica no desaparecerán a corto plazo a menos que se efectúen reformas estructurales de un modo inmediato. La delincuencia juvenil es un problema social, y como tal puede combatirse mediante políticas de intervención. La pobreza y la desigualdad no son algo transmitido biológicamente y su eliminación puede hacerse posible mediante políticas de intervención. La literatura analizada sugiere que pueden darse más pasos hacia la prevención y reducción de la violencia juvenil mediante varios enfoques diferentes.

Estos incluyen esfuerzos a nivel local para mejorar y reforzar la provisión de servicios sociales, así como programas específicos para jóvenes en riesgo que impliquen la participación de todos los sectores de la sociedad.

Sin embargo, las intervenciones locales no deberían llevar a los gobiernos centrales a tomar una actitud complaciente y adoptar una política de “sentarse a esperar”. El papel del gobierno central en lo que respecta a coordinar esfuerzos inter-institucionales, definir prioridades, corregir distorsiones del mercado, generar empleo y garantizar la prestación de servicios sociales básicos no es sólo necesaria, sino drásticamente urgente. Un modelo social de desarrollo más humano, y una prestación más efectiva de servicios contribuirá no solo a una mejora del crecimiento económico y el desarrollo social, sino también a proporcionar un suelo fértil para el crecimiento de una democracia profunda y sostenible.

Bibliografía

Argudo, M. (1991) Pandillas juveniles en Guayaquil, Ed. Ildis, Quito, Ecuador.

Arrigada, I. y Godoy, L. (1999) “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina: Diagnóstico y Políticas en los Años Noventa”, Series de Política Social N° 32, CEPAL, Santiago de Chile.

Arriagada, I. y Godoy, L. (2000) “Prevention or Repression? The False Dilemma of Citizen’s Security”, en el boletín de CEPAL, 70: pp. 110-136.

Ayres, R.L. (1998) “Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean”, Estudios latinoamericanos y caribeños del Banco Mundial, Washington DC, Enero.

Banco Interamericano de Desarrollo (1998) “Violencia en América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción”, Departamento de Desarrollo Sostenible, Washington DC.

Banco Interamericano de Desarrollo (1999) “Pobreza y Desigualdad en América Latina y el Caribe. Tendencias de la pobreza en la década de 1990”. Departamento de Desarrollo Sostenible, Diálogo “Por un desarrollo para todos”, Washington, D.C., 8 y 9 de noviembre.

Banco Interamericano de Desarrollo (2003) Inequality, Exclusion and Poverty in Latin America and the Caribbean: Implications for Development, Seminario EC/IDB: Cohesión Social en in Latinoamérica y el Caribe. Preparado por Bouillon, C.P. y Buvinic, M., Bruselas, Junio.

Becker, G.S. (1968) “Crime and Punishment: an Economic Approach”. Revista de Economía Política 73: pp. 169-217.

Beverly A. Carlson (1999) “Social Dimensions of Economic Development and Productivity: Inequality and Social Performance”, ECLAC, Naciones Unidas, Agosto, Santiago de Chile.

Blanco, C. (1992), Marginalidad y Violencia, Instituto de Estudios Sociales Juan Pablo II, Bogotá.

Blau, J., Blau, P. (1982). "The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime". American Sociological Review, Vol. 47, pp. 114-129.

Bourguignon, F. (1999) “Crime, Violence and Inequitable Development”, Conferencia Anual del Banco Mundial sobre la economía del desarrollo, 28-30 de abril, Banco Mundial, Washington, D.C.

Braithwaite, J. (1979) Inequality, crime and public policy, Routledge y Kegan Paul, Londres, Boston y Henley.

Briceño-León, R. (1997) “Buscando explicaciones a la violencia”, en Espacio Abierto (Maracaibo), Vol. 6, No.1, pp.45-69.

Briceño-León, R., Carneiro, P.L. y Cruz, J.M. (1997) “El apoyo ciudadano a la acción extrajudicial de la policía en Brasil, El Salvador y Venezuela”, en Realidad (San Salvador), No. 60.

Buvinic, M. (1995) “The Feminization of Poverty? Research and Policy Needs” en Figueiredo, J.B. y Shaheed, Z. (eds.) New Approaches to Poverty Analysis and Policy, Vol.2, Reducing Poverty through Labour Market Policies, Ginebra, Instituto Internacional de Estudios del Trabajo, 1995, pp. 133-54.

Buvinic, M., Morrison, A. y Shifter, M. (1999) “Violence in Latin America and the Caribbean: A Framework for Action”, Banco Interamericano de Desarrollo, Marzo, Washington D.C.

Call, C. (2000) “Sustainable Development in Central America: The Challenges of Violence, Injustice and Insecurity”, CA 2020: Ensayo N° 8, 2000.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (1994) *Familia y Futuro: un programa regional en América Latina y El Caribe*, Santiago, Chile, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (1998) *Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 1997-1998. Summary*, LC/G.1968-P, Santiago, Chile, Septiembre, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2000) *The Impact of Structural Reforms on Growth in Latin America and the Caribbean: an Empirical Estimation*, LC/L.1446-P/1, Santiago, Chile, Noviembre, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2000) LC/L.1445-P/E, *Adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe: problemas, oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo*, Santiago, Chile, Marzo, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2001) *Modernización Económica y Empleo en América Latina. Propuestas para un Desarrollo Incluyente*, LC/L. 1512-P/E, Santiago, Chile, Marzo, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2001)

Job Creation in Latin America in the 1990s: The Foundation of Social Policy, LC/L. 1572 P/I, Santiago, Chile, Julio, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (2001)
The Income Distribution Problem in Latin America and the Caribbean
Morley, S., (LC/G.2127-P) Santiago, Chile, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), (2001)
LC/G. 2138 – P/I Social Panorama of Latin America, 2001-2002, *Santiago, Chile, Septiembre*, Publicaciones de las Naciones Unidas.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), (2001)
LC/G. 2183 – P/I Social Panorama of Latin America, 2002-2003, *Santiago, Chile, Octubre*, Publicaciones de las Naciones Unidas.

Chavez, E.L., Edwards, R.Y., y Oetting, E.R. (1989) “Mexican American and White American School Drop outs, Drug Use, Health Status, and Involvement in Violence”, Public Health Reports Vol. 104 (6), pp. 594-604.

Cloward, R. y Ohlin L., (1960) Delinquency and Opportunity, Nueva York: The Free Press.

Cohen, A.K. (1955) Delinquent boys: The Culture of Gangs, Glencoe, IL: Free Press.

Cohen, S. (1980) Folk Devils and Moral Panics, Oxford: Martin Robinson.

Cooper, D. (1986). “Contraculturas: Una tipología de la delincuencia”. Revista de Sociología, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

Cooper, D. (1989). “Teoría del continuo subcultural de la delincuencia”. Revista de Sociología, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

Cooper, D. (1992). “Juventud, delincuencia y violencia”. Revista de Sociología, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

Cornia, G.A. (1994) “Macroeconomic policy, poverty alleviation and long-term development: Latin America in the 1990s”. UNICEF, Instituto Innocenti, Febrero, Florencia, Italia.

Cruz, J.M y Gonzáles, L.A. (1997) “Magnitud de la Violencia en El Salvador” en Estudios Centroamericanos, 588: pp. 953-966.

Cruz, J.M. (1998a) “Los factores Posibilitadores de la Violencia en El Salvador” en PNUD, Violencia en una Sociedad en Transición, PNUD: San Salvador, 88-95.

Cruz, J.M. y Portillo Pena, N. (1998b), Solidaridad y Violencia en las Pandillas del Gran San Salvador. Más Allá de la Vida Loca, UCA Editores, San Salvador.

Cruz, J.M., Trigueros Arguello, A. y González, F. (1999) "The Social and Economic Factors associated with Violent Crime in El Salvador", Informe de IUDOP realizado para el Banco Central, San Salvador, Noviembre de 1999.

Cruz, J.M. y Beltrán, M.A. (2000) "Las armas en El Salvador: Diagnóstico sobre su Situación y su Impacto", Artículo presentado en el Primer Foro Centroamericano sobre Proliferación de Armas Ligeras, 26-29 Julio 2000: Antigua, Guatemala

De Cesare, D. (1998) "The Children of War. Street Gangs in El Salvador". NACLA, Vol. 32, No. 1.

De Souza Minayo (1999) Fala, galera: juventude, violência e cidadania. Río de Janeiro, Garamond.

Deininger, K. y Squire L. (1996) "A new database measuring income inequality", World Bank Economic Review, Vol. 10, N° 3, Washington, D.C., Banco Mundial.

DIF-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) (1999), "Yo también cuento. Estudios de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades" Resultados *definitivos*.

Dowdney, L. (2002) "Child combatants in Organised Crime Violence: a Study of Children and Adolescents Involved in Territorial Drug Faction Disputes in Rio de Janeiro", Primera Edición para la presentación en el Seminario sobre Niños Afectados por el Crimen Organizado, Río de Janeiro, 9 de septiembre de 2002.

Ehrlich, I. (1973), "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation". Journal of Political Economy Vol. 81: pp. 521-565.

Ehrlich, I. (1975) "On the Relation between Education and Crime". In Education, Income and Human Behaviour, editado por Juster, F.T. Mc Graw-Hill, Nueva York.

Escobar, F.A. (1996) "Por mi madre vivo y por mi barrio muero. Una aproximación al fenómeno de las maras", ECA Estudios Centroamericanos, Revista de extensión cultural de la Universidad "José Simeón Cañas" No. 570, Año LI, San Salvador, Abril.

Fagan, J. y Wilkinson, D.L. (1998) "Guns, Youth Violence, and Social Identity in Inner Cities", en Youth Violence, editado por Tonry, M. y Moore, M.H., The University of Chicago Press, Chicago.

Fagan, J. (1989) "The Social Organization of Drug Use and Drug Dealing Among Urban Gangs", Criminology Vol. 27, pp. 633-69.

Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N., (1998) "Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: An Empirical Assessment". Banco Mundial, Estudios latinoamericanos y caribeños. Viewpoints. Banco Mundial, Washington D.C.

Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N., (2001) "Inequality and Violent Crime" Pronto en The Journal of Law and Economics

FLACSO, Programas para la Prevención de la Violencia y Delincuencia Juvenil, documento elaborado para el IDB: ES-0116.

Fleisher, B. (1966) "The Effect of Income on Delinquency". American Economy Review Vol. 56: pp. 118-137.

Freeman, R.B. (1996) "Why Do So Many Young American Men Commit Crimes and What Might We Do About It?" Journal of Economic Perspectives, Vol. 10:1 (Winter).

Gaitán Daza, F., Díaz Moreno, J. (1994) "La violencia colombiana: Algunos elementos explicativos". En Fernando Carrión, Alberto Concha y Germán Cobo (Eds.) Ciudad y violencia en América Latina, Programa de Gestión Urbana Vol. 2 – PGUI, Oficina Regional Para América Latina y el Caribe.

García-Peña Jaramillo, D. (1995) "Light Weapons and Internal Conflicts in Colombia", en Boutwell, J., Klare, M.T., Reeds, L.W., eds, Lethal Commerce: The Global Trade in Small Arms and Light Weapons, Cambridge, MA.: Academia Americana de las Artes y las Ciencias.

Gaviria, A. y Pagés, A. (1999) "Patterns of Crime Victimization in Latin America", IDB Ensayo N° 408, IDB: Washington DC.

Goldstein, P.J. (1985) "The Drug-Violence Nexus: A Tri-partite Conceptual Framework". Journal of Drug Issues Vol. 5: pp. 493-506.

Goldstein, P.J. (1989) "Drug and Violent Crime". En Pathways to Violent Crime, editado por Weiner, N.A., y Wolfgang, M.E., Newbury Park, Calif.: Sage.

Hagedorn, J.M. (1998a) "Gang Violence in the Post-Industrial Era", en Youth Violence, editado por Tonry, M. y Moore, M.H., The University of Chicago Press, Chicago.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, "Criminal Victimization of the Developing World", Roma, 1995.

IUDOP (Instituto Universitario de Opinión Pública) (1998) "La Violencia en El Salvador en los Años Noventa. Magnitud, Costos y Factores Posibilitadores" Ensayo de IDB R-338, IDB: Washington DC.

Jankowski, M.S. (1995) "Ethnography, Inequality and Crime in the Low-Income Community", in Crime and Inequality, editado por Hagan, J. y Peterson, R., Stanford University Press, Stanford, California.

Londoño, J.L. y Székeley M. (1997) "Persistent Poverty and Excess Inequality: Latin America, 1970-1995", Series de Ensayos OCE, N° 357, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Londoño, J.L. (1998) "Poverty, Inequality and Human Capital Development in Latin America, 1950-2025", estudios latinoamericanos y caribeños, Banco Mundial

Messner S.F., y Rosenfeld, R. (1997) "Political restraint of the market and levels of criminal homicide: a cross-national application of institutional-anomie theory", Social Forces, Vol. 75: pp. 1393-1416.

Miller, W.B. (1958) "Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency", Journal of Social Issues Vol. 14, pp. 5-19.

Miller, W.B. (1974) "American Youth Gangs: Past and Present" en Current Perspectives in Criminal Behaviour, ed. A. Blumberg, New York

Moore, J., with García, R., García, C., Cerda, L., y Valencia, F. (1987), Homeboys: Gangs, Drugs and Prison in the Neighbourhoods of Los Angeles, Filadelfia: Temple University Press.

Morley, S.A. (1995) Poverty and Inequality in Latin America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1995.

Moser, C. y Winton, A., (2002) "Violence in the Central American Region: Towards an integrated Framework for Violence Reduction" Overseas Development Institute Working Paper No. 171, Londres: ODI.

Moser, C. et al. (1999), "Violence and Social Capital: Proceedings of the LCSSES Seminar Series, 1997-1998" Agosto, Banco Mundial, Washington, D.C.

Moser, C. con Shrader, E. (1999) "A Conceptual Framework for Violence Reduction" Urban Peace Programme Series, Latin American and Caribbean Region Sustainable Development Working Paper No.2, World Bank, Washington DC.

Norhonha, C.V., et al. (1999) "Violence, ethnic groups and skin colour: a study on differences in the metropolitan region of Salvador, Bahia, Brasil". Pan American Journal of Public Health, Vol. 5: pp. 268-277.

OMS, Organización Mundial de la Salud, Informe de Desarrollo Mundial sobre Violencia y Salud, Octubre de 2002, Organización Mundial de la Salud, Washington D.C.

OPS, Organización Panamericana de la Salud (1999) Pan American Journal of Public Health: "Special Issue on Violence" Vol. 5, OPS: Washington DC.

OPS, Organización Panamericana de la Salud (1996) y la Organización Mundial de la Salud "Violence and the Media" Washington, D.C.: OPS y OMS (Septiembre).

OPS, Organización Panamericana de la Salud (1996) "La Violencia en las Américas: la pandemia social del siglo XX" Washington, D.C.

OPS, Organización Panamericana de la Salud (1997) “Taller sobre la Violencia de los Adolescentes y Pandillas” Washington D.C.

Organización Internacional del Trabajo / IPEC (2002) “Brasil Children in Drug Trafficking: A Rapid Assessment”, Febrero de 2002, Ginebra.

Pirie, P.L., Murray, D.M., y Luepker, R.V. (1988) “Smoking Prevalence in a Cohort of Adolescents, Including Absentees, Dropouts and Transfers”. American Journal of Public Health, Vol. 78, pp.176-178.

PNUD, “United Nations Development Program, Human Development Report 2002” Publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Nueva York, Oxford, Oxford University Press, 2002.

PNUD, “United Nations Development Program, Human Development Report 2003” Publicado por Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Nueva York, Oxford, Oxford University Press, 2003.

Ramos, J. (1996) “Poverty and Inequality in Latin America: a neo-structural perspective”, *Journal of Inter American Studies and World Affairs*, Vol. 38, No. 2-3, Miami, University of Miami.

Rodgers, D. (1998) “Chaos or order? Youth gangs and violence in Nicaragua”, discurso pronunciado en el ciclo de seminarios de LCSES “Governance, Social Capital and Violence”, Banco Mundial, Washington D.C., USA, 14 de enero.

Rodgers, D. (1999) “Youth Gangs and Violence in Latin America and the Caribbean: A Literature Survey”, *Latin America and Caribbean Region Sustainable Development Working Paper No.4 (Urban Peace Series)*, Banco Mundial, Washington D.C., EE.UU. Agosto.

Rodgers, D. (2003) “Dying For it: Gangs, Violence and Social Change in Contemporary Urban Nicaragua”, Primer borrador, Marzo (no está en circulación).

Sanjuán A.M. (1998) “Juventude e violência em Caracas: paradoxos de um processo de perda de cidadania” en Pinheiro P.S., ed. *São Paulo Sem Medo: Um Diagnóstico Da Violência Urbana*. Río de Janeiro, Garamond, pp.155-171.

Short, J.F. (1997) *Poverty, Ethnicity, and Violent Crime*, Westview Press: Boulder.

Smutt, M. y Miranda, J.L.E. (1998), “El Fenómeno de las Pandillas en El Salvador”, UNICEF/FLACSO: San Salvador.

Spergel, I. (1989), “Violent Gangs in Chicago: In Search of Social Policy”, *Social Service Review* Vol. 58: pp. 199-225.

Stack, S. (1984). “Income Inequality and Property Crime: A Cross-National Analysis of Relative Deprivation Theory”. *Criminology* Vol. 22 (2): pp. 229-257.

Thrasher, F. (1927), *The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago*, Chicago, Chicago University Press.

Townsend, P. y Gordon, D. (2002) World Poverty, New Policies to Defeat an Old Enemy, The Policy Press, Bristol, UK

Vigil, D. (1988), Neighbourhood Gangs, Austin: University of Texas Press.

Villavicencio, G. (1993). “Guayaquil: Pobreza, delincuencia organizada y crisis social”. Ponencia presentada en el seminario Ciudad y Violencia en América Latina. PGU y Alcaldía de Cali, Colombia.

Weyland, K. (2003) “Political Repercussions of Crime and Violence in Latin America”, an Essay for the Conference on Culture and Peace: Politics and Representation in the Americas, University of Texas at Austin, Law School, 24-25 de Marzo.

Wilson, W.J. (1997) When Work Disappears: New Implications for Race and Urban Poverty in the Global Economy, Nueva York: Alfred A. Knopf.

Zaluar, A. (2000), “Violence Related to Illegal Drugs, “Easy Money” and Justice in Brasil: 1980-1995”, Management of Social Transformations MOST, Discussion Paper Series No. 35, UNESCO, París.